

Crisis política y organización popular en El Salvador

SARA GORDON

El marco en el que se da el actual conflicto en El Salvador es un continente surcado por la represión, donde el capitalismo en crisis afecta a los países y a sus clases. El movimiento liberalizador, que reinaugura en la década del setenta el esfuerzo combativo de los pueblos e inclina el fiel de la balanza de un lado, es el triunfo del pueblo en Nicaragua. Este triunfo, y la difusión de la lucha popular en Centroamérica, han puesto sobre aviso al Departamento de Estado norteamericano, a las clases dominantes locales y a sus altos mandos militares, beneficiados durante años con la opresión y explotación de sus pueblos. Y entonces se ensayan políticas reformistas, se solicitan observadores para corroborar la imparcialidad de los procesos electorales, se lucha por la redistribución del ingreso y aun se impulsan alteraciones a la estructura de la propiedad agraria. Medidas como la nacionalización de la banca y del comercio exterior son aplaudidas en tanto sea la burguesía quien las controle. Esta es la estrategia del poder establecido, inscrita en los marcos doctrinarios de la seguridad nacional y de la contrainsurgencia, que fuera diseñada a raíz del triunfo de la Revolución cubana.

Y ahora es el pequeño país, el 'Pulgarcito' de América Latina, de escasos 20,800 kilómetros y 4 millones 400 mil habitantes, el escenario donde se prueba la eficacia estratégica de las reformas.

La profunda polarización de clases que sacude a El Salvador es producto de años de dictadura militar al servicio de una burguesía oligárquica cerrada, que durante 48 años ha excluido al pueblo de la participación. En esa polarización se expresa la crisis del sistema de dominación política, que va más allá de una crisis de autoridad y prefigura una situación preinsurreccional, ya que contiene elementos de trastocamiento del orden, de ruptura de la autoridad política institucional, de desobediencia civil; las formas que tradicionalmente han garantizado la dominación y el aislamiento de los sectores populares no parecen funcionar más. A pesar de que la Junta Militar ha intentado objetivos reformistas, para-

lelos a su ejercicio represivo, no ha podido reestructurar el orden previo a la crisis, ni iniciar la construcción de uno nuevo, que permita continuar la opresión y explotación del pueblo. El enfrentamiento entre las clases se ha profundizado y los elementos de mediación tradicionales ya no funcionan. El pueblo trabajador lucha organizadamente, y en esa lucha ha descubierto la manera de reivindicar sus demandas y la posibilidad de un orden social y político que le permita ser el principal protagonista.

Las raíces del descontento

La crisis de dominación y la polarización de clases han alcanzado grados extremos y expresan la concentración de condiciones económicas, políticas y sociales que son la base para la acción popular organizada. En la crisis se da la lucha directa de los adversarios, ya que desaparecen los elementos de mediación y los campos se definen con mayor claridad. Ante la crisis política que vive El Salvador, surgen varias interrogantes: ¿Cuáles son las causas del descontento popular? ¿Por qué se ha llegado a tal extremo de polarización? y, sobre todo, ¿en cuáles rasgos descansa el carácter dictatorial del régimen salvadoreño, que han impedido impulsar reformas y modificar una situación opresiva? La mayoría de los esfuerzos democratizadores han sido truncados; de los más relevantes recordamos aquellos que tuvieron lugar en 1944, 1948, 1960 y de la década del 70, los procesos electorales de 1972 y 1977.

Consideramos que las raíces del sistema de exclusión política salvadoreño se ubican en dos planos, el estructural y el histórico, es decir, tanto en la conformación de la estructura económica y política en la que se consolida un sistema de relaciones, como aquel que se reproduce cada día en esa estructura de relaciones económicas y políticas y que responde a la confrontación entre las clases y sectores de clase; es en este último plano en el que se llevan a cabo los intentos para modificar la estructura, donde compiten los proyectos.

La inserción del país en el mercado capitalista internacional se hizo a través de la producción de café, que trajo consigo la reforma liberal en el último tercio del siglo XIX. En no más de 40 años se acabó con la propiedad ejidal y comunal de la tierra; casi la mitad del territorio fue convertido en propiedad privada, concentrada en pocas manos.¹ Además, se dictaron medidas para impulsar el cultivo del café y pronto la economía del país se organizó en torno a las actividades relacionadas con este producto; el sector de clase que detentaba la propiedad de la tierra se consolidó en el poder. El despojo de ejidos y tierras comunales propició

¹ Cfr. Menjívar, Rafael "El eslabón más pequeño", en *Le Monde Diplomatique* en español, Año 1, Nº 9, septiembre de 1979, p. 22.

el desarrollo de un incipiente proletariado y semiproletariado rural, de ese modo, a la par que se daba el proceso de concentración de la tierra, avanzaron las relaciones mercantiles y más tarde capitalistas de producción.

Sin embargo, la eliminación de las relaciones precapitalistas no tuvo su correlato en el desarrollo industrial. Sin enclaves, con poca inversión extranjera, la oligarquía cafetalera se afianzó en el poder. Pero también los trabajadores se organizaron para luchar por sus demandas y en la tercera década de este siglo, aparecieron las primeras huelgas y asociaciones laborales, que en 1924 culminaron en la fundación de la Regional de Trabajadores, que para 1932 contaba ya con 75,000 afiliados.²

Las repercusiones de la crisis económica mundial de 1929 aceleraron el proceso organizativo de campesinos, obreros y otros sectores asalariados; en 1930 se fundó el Partido Comunista y el Partido Laborista extendió su acción, esta última agrupación recogía demandas populares y representaba a las tendencias que apuntaban hacia una mayor participación política y a un desarrollo de la industria. Mediante la acción organizada se logró la única elección libre que ha tenido El Salvador en toda su historia independiente; en ella triunfó Arturo Araujo, candidato del Partido Laborista. Ocho meses después de asumir la presidencia, Araujo fue derrocado porque se aisló de sus bases de apoyo;³ el golpe de Estado dio paso a la dictadura de Hernández Martínez y los partidos laborista y comunista llamaron a la insurrección para combatir a la dictadura.

En la respuesta a la insurrección de 1932 se encuentra la clave de la dominación represiva, de la fortaleza de la oligarquía, pero también de su atraso y del atraso en que se halla sumida la población. La violencia con que fue reprimido el brote insurreccional —30,000 campesinos y obreros asesinados— fue una parte de la solución que ‘aportó’ Hernández Martínez, la otra se refiere a medidas de política económica: para paliar los efectos de la crisis económica y de la caída de precios del café, emitió la Ley de Defensa del Café, que protegió a los grandes productores, además devaluó la moneda y decretó la moratoria de las deudas. Paralelamente prohibió la importación de maquinaria agrícola y, para preservar la producción artesanal, impidió que se establecieran fábricas de aquellos artículos que elaboraban los artesanos; además prohibió instalar fábricas con un capital mayor de 20,000 colones.⁴ De esta manera se retrasó el desarrollo industrial y la traslación del excedente agrícola a la industria. Cuando Hernández Martínez renunció en 1944, fueron anuladas estas medidas, pero no fue anulada la concentración de la pro-

² *Ibid.*

³ Salazar Vicente, Mario “Breve historia de medio siglo de El Salvador”, (mimeo) 1975, trabajo que será incluido en *América Latina: historia de medio siglo*. (coedición Siglo XXI-IIS) pp. 5-8.

⁴ *Cfr.* White, Alastair, *El Salvador. A Nation of the Modern World*, Londres, Ed. Brenn, 1973, pp. 102-103.

piedad; el desarrollo del capital y de la inversión industrial pudieron avanzar en tanto no tocaran la estructura de la propiedad, ni los canales de la agroexportación.

Para establecer las causas de la estrechez del régimen político salvadoreño, y de la inequitativa distribución de la riqueza que han provocado la acumulación del descontento popular en años de opresión, es necesario tener bien presente el modo en que la clase dominante pudo consolidarse en el poder, que significó la exclusión política de la población y el atraso de las relaciones sociales, aun cuando había excedente económico para transferirlo a la industria. La oligarquía terrateniente logró conservar el monopolio de las decisiones de política económica y desde entonces delegó la función de gobierno en las fuerzas armadas.

Sólo después de la segunda guerra mundial se inició en El Salvador —como en toda Centroamérica— el proceso de industrialización y surgió de la misma oligarquía un grupo —también ligado al capital internacional— que defiende procedimientos más modernos y cuyo proyecto contempla la necesidad de reformas económicas y políticas. Dado que los esfuerzos reformistas no pudieron fructificar, debido a la oposición activa del sector agrario,⁵ la integración económica centroamericana representó la posibilidad de expansión del capital en la industria, sin alterar la estructura de relaciones económicas y políticas.

Cada uno de los esfuerzos por modernizar la estructura económica, por ampliar la participación política, se ha enfrentado a esta dura oposición del sector agrario de la clase dominante y de los altos mandos militares, beneficiarios del régimen político.

Los años de 1979 y 1980 han sido testigos de una gran capacidad movilizadora y organizativa del pueblo salvadoreño. Ocupación de iglesias —que así expresan el pacto sellado entre el pueblo y el clero progresista—; tomas de tierras para lograr el pago justo al trabajo; ocupación de embajadas y secuestro de diplomáticos, cuyo objetivo ha sido llamar la atención internacional sobre lo que ocurre en el país; manifestaciones multitudinarias en las que el frente de masas demuestra su capacidad aglutinadora en torno a demandas arraigadas en años de explotación; operativos políticos-militares en los que se ajusticia a torturadores del pueblo, o se cobran los 'impuestos de guerra'; tomas de ministerios, cuya fuerza organizativa transforma a campesinos y representantes populares en interlocutores legítimos, frente a funcionarios y miembros de la Junta de Gobierno. Todas estas acciones reflejan el ánimo antiautoritario que hoy recorre el país, pero también un nuevo modo de lucha política, nuevos beneficiarios del desarrollo social, nuevos criterios para distribuir el excedente.⁶

⁵ Este término se refiere a concepciones político ideológicas, más que a la fuente de donde el sector extrae sus ganancias.

⁶ *Cfr. Informática* de El Salvador, Centro de Información y Documentación CIDOC, mayo de 1979.

Si bien este impulso de lucha contra las clases dominantes es hoy el elemento central que caracteriza a la crisis en El Salvador, hay otros que también la expresan, sobre todo aquellos que se refieren a la relación clase dominante-clase gobernante-ejército. Los altos mandos del ejército, que en años de gobierno han entrelazado sus intereses con los de la oligarquía —aquellas catorce familias del café y las finanzas— no pueden permitir que se implanten las reformas propuestas por miembros del ejército con mentalidad modernizadora, por sectores 'industrializantes' de la clase dominante y por asesores norteamericanos. Así, los sectores más conservadores de la clase dominante también organizan paros, manifestaciones, y asesinan a trabajadores y miembros de las organizaciones populares, para lograr la restauración del orden político que garantiza la reproducción de sus intereses.

En lo que todos los sectores y representantes de las clases dominantes coinciden es en la vía represiva para contener la lucha popular. El Departamento de Estado norteamericano trata de fortalecer a la Junta Militar mediante créditos para que pueda reactivar la economía y desarrollar un proyecto de gobierno. En lo que va del año se le han otorgado préstamos por más de 27 millones de dólares, y para reforzar su capacidad bélica el Congreso norteamericano acaba de aprobar un crédito por 5.7 millones para Honduras y El Salvador, destinado a la adquisición de equipo militar. A eso se debe agregar la asesoría técnica y militar. De este modo se ha acentuado y profundizado la polarización política y social; la pretensión de preservar el orden social y político se ha convertido en represión pura, cuyo argumento de fondo se ha reducido a la defensa de los sectores de la burguesía y de la política norteamericana.

La crisis política que estalló en 1976, arranca de la situación creada a raíz del conflicto bélico con Honduras en 1969 —la llamada guerra del fútbol.

El enfrentamiento armado y la consiguiente ruptura de relaciones entre los dos países tuvieron hondas repercusiones para El Salvador, entre otras, la pérdida del mercado hondureño, comprador tradicional de los productos industriales salvadoreños, y la repatriación de miles de trabajadores que emigraban debido a la falta de oportunidades en su país. Honduras dejó de ser el traspatio en el que la burguesía salvadoreña depositó mercancías y lucraba, a la vez que pudo paliar el problema político que significaban los miles de campesinos sin tierra y sin trabajo. Aunque la baja de exportaciones fue resuelta en pocos años a través de canalizar la producción hacia nuevos mercados, sobre todo europeos y norteamericanos, se evidenció el fracaso del Mercado Común Centroamericano, ya en crisis antes del conflicto armado; cobró entonces fuerza un planteamiento alternativo de desarrollo, encabezado por el sector de la clase dominante identificado con el capital industrial, cuyo objetivo era profundizar la modernización social y económica para reforzar su predominio.

Sus orientaciones incluían la reforma agraria y la redistribución del ingreso.

Por otra parte, el regreso de los trabajadores agravó las contradicciones generadas en la estructura económica, ya que agudizó la evidencia de la concentración de la propiedad, y el descontento político de los sectores populares, sobre todo en el agro. Además, los trabajadores que regresaban habían participado en las huelgas de las compañías bananeras en Honduras y traían consigo una amplia experiencia de lucha; con el objeto de impedir los efectos de su protesta, el gobierno de Fidel Sánchez H. (1967-1972) los desperdigó por todo el territorio, de esa manera pudieron difundir su experiencia organizativa. Además, el proceso de concentración de la tierra aumentó.⁷

En el campo de la izquierda, el conflicto armado también fue clave. En el Partido Comunista, que había venido actuando de manera clandestina, surgieron dos tendencias ideológicas; en una de ellas se desarrolló una visión integralista de la contienda política, que entrelazaba la necesidad de la lucha armada con la organización de masas; la otra daba prioridad a la organización sindical. En 1970, a raíz de que la corriente sindical apoyó al gobierno en el enfrentamiento bélico, la tendencia integral se escindió y fundó las Fuerzas Populares de Liberación, organismo que empezó a actuar públicamente en 1972. Por otra parte, en 1970 se fundó el ERP, integrado por cristianos radicalizados, y que entonces tenía una visión militarista de la transformación política.⁸ Las discrepancias internas culminaron en 1975 con el fusilamiento del poeta Roque Dalton y la escisión. El grupo escindido formó las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN), que combinaba la lucha armada con la necesidad de organización de los sectores populares. La difusión de la concepción integralista en el interior de la izquierda, en un ambiente de protesta, agudizado por los fraudes electorales de 1972 y 1974, por el cierre de la Universidad, la persecución de líderes sindicales y políticos, dio origen a la formación de tres frentes de masas: el Bloque Popular Revolucionario (BPR) en 1975, el Frente de Acción Popular Unificada (FAPU) y las Ligas Populares 28 de febrero (LP 28) en 1977).

Lo que es importante destacar es la convergencia de la protesta popular, con el desarrollo de la visión integral —organización política de las masas, lucha armada— en el seno de la izquierda, ya que ha permitido entrelazar el combate por las reivindicaciones inmediatas, con una estrategia de poder. En este elemento reside el avance de la organización

⁷ Las tierras más favorables para los cultivos de exportación —café, algodón, azúcar— fueron el escenario del despojo. Según Samaniego, entre 1961 y 1971 el número de familias sin tierra aumentó de 11.8% a 29.1%. Para 1975 la cifra se elevó al 40.9% de la población rural. *Cfr.* Carlos Samaniego "¿Movimiento campesino o lucha del proletariado rural en El Salvador?" en *Estudios Sociales Centroamericanos*, Costa Rica, Programa Centroamericano de Ciencias Sociales, Año IX, Nº 25 enero-abril de 1980, pp. 52-56.

⁸ *Cfr.* Menjívar, *Op. cit.*, p. 23.

popular, el 'crescendo' de su beligerancia, ya que amplió la posibilidad de canalizar la protesta espontánea por cauces que dejan entrever un orden social, económico y político más justo. Esta concepción global, totalizadora, se ha expresado en los métodos de trabajo político, en la forma que reviste cada una de las batallas para obtener aumentos salariales, de las acciones para preservar las fuentes de trabajo, para defenderse de la represión en las zonas agrícolas, en las fábricas, en las universidades y que ha hecho posible mantener la autonomía del movimiento popular.

Paralelamente, hay un punto de cruce, de intersección con la crisis que desde 1976 se manifiesta abiertamente en el interior de la clase dominante, a raíz de que el sector industrial planteó la necesidad de una reforma agraria.

Con el doble objetivo de aquietar el descontento popular y llevar adelante los propósitos de remozamiento de la estructura económica, la fracción industrial de la burguesía, encabezada por el presidente Arturo A. Molina (1972-1977), propuso en junio de 1976 la Transformación Agraria, como parte de un programa de modernización. La propuesta dio paso a un enfrentamiento en el interior de la clase dominante; quienes se oponían al proyecto de reforma agraria se organizaron, así resurgió la ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada), cobró fuerza ORDEN (Organización para la Defensa de la Democracia), y se constituyeron FARO (Frente Agrario de la Zona Oriental) y otras agrupaciones, que expresaban objetivos de defensa de la propiedad privada y, sobre todo, la preservación del sistema de relaciones económicas y políticas. En el conflicto triunfaron los grupos más conservadores, cuya capacidad de movilización se vio fortalecida, al tiempo que el partido oficial (Partido de la Conciliación Nacional), que había apoyado la reforma, fue debilitado. En los últimos meses de su gestión, Molina ya no tenía fuerza.⁹

Aunque el movimiento popular no apoyó el proyecto de reforma, su cancelación produjo descontento, que se expresó en huelgas y tomas de tierras. El gobierno y los grupos paramilitares reprimieron las acciones, persiguieron a los sacerdotes progresistas que apoyaban la organización de los campesinos y a los jesuitas que habían defendido la reforma agraria. La persecución y asesinato de los curas fue difundido internacionalmente, lo cual deterioró la imagen del gobierno salvadoreño en el exterior.

La crisis se agravó a raíz de las elecciones presidenciales de 1977: en ellas, los partidos de oposición Demócrata Cristiano, Movimiento Nacional Revolucionario y Unión Democrática Nacionalista, agrupados en la UNO (Unión Nacional Opositora), presentaron un candidato militar, el general retirado Claramount y moderaron su programa de reformas, esperando neutralizara así a los militares. El fraude oficial fue abierto: las

⁹ Cfr. Guidos Véjar, Rafael "La crisis política en El Salvador", 1976-1979" en *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Universidad Centroamericana J. S. Cañas, Año XXXIV, N° 369-370, julio agosto 1979 pp. 514-515.

urnas estaban llenas antes de la votación; la movilización que encabezó la UNO para protestar por el fraude fue violentamente reprimida y los líderes de los partidos tuvieron que abandonar el país.¹⁰ El engaño y la represión tuvieron consecuencias que repercutirían más tarde en el propio bloque dominante: las organizaciones opositoras fueron debilitadas, desarticuladas y perdieron bases de sustentación; entre los sectores populares que las apoyaban y habían votado por ellas, se extendió la convicción de que era inútil luchar por la vía electoral y paulatinamente se integraron en los frentes de masas de las agrupaciones de izquierda, donde lucharían cada día por sus demandas.

Cuando el candidato oficial Carlos H. Romero asumió la presidencia en julio de 1977, recibió un Estado disminuido en sus bases de apoyo, sobre todo en el campo; además estaban el descrédito internacional por la difusión y la protesta que habían ocasionado los secuestros y asesinatos de sacerdotes. En el marco de la política de defensa de los derechos humanos que sostenía Carter en ese período, se suspendieron los créditos a El Salvador.¹¹ De esta manera, ante la necesidad de reconstruir las bases de apoyo internas y recuperar la imagen externa, entre julio y noviembre de 1977 Romero aflojó la persecución y hubo una tolerancia relativa a las acciones del movimiento popular organizado, sobre todo en la ciudad, pero no cesaron la represión ni la actividad terrorista de los grupos paramilitares. Frente a las huelgas y tomas de iglesias, fábricas y tierras, las organizaciones derechistas exigieron que el Estado mantuviera el orden social. A raíz del asesinato de un industrial, se empezó a elaborar un proyecto de ley que permitiera a la fracción dominante el control político y social. En noviembre de 1977 fue emitida la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público, que institucionalizó la cancelación de las garantías constitucionales; así pudieron volver los créditos internacionales y la presión norteamericana por la defensa de los derechos humanos cedió.¹² Pero a pesar de la nueva Ley, la actividad de los organismos populares prosiguió; de este período cabe destacar la efervescencia de la lucha popular en las universidades, en las fábricas, en el campo, paralelas al ajusticiamiento de miembros de grupos paramilitares.

La crisis del sistema de dominación se vio agudizada por las repercusiones de la crisis económica internacional; entre ellas sobresalen un proceso inflacionario que aumentó de 7% en 1976, a 12% en 1977, agravado por el alza del petróleo. Por otra parte, los precios internacionales del café, principal fuente de divisas, bajaron. Dado que el gobierno no dispuso de recursos financieros para impulsar la actividad económica, disminuyó el crecimiento económico, de un 5% en 1976 a un 3% en 1978,

¹⁰ *Cfr. Keesings Contemporary Archives*, London, abril 1977, p. 28291.

¹¹ *Cfr. Latin America Bureau*. "El Salvador bajo el general Romero. Un análisis de los primeros nueve meses del régimen del presidente Romero", Londres (mimeo) 1978.

¹² *Ibid.*

situación que se expresó en desempleo, tanto en el sector industrial como en el agropecuario.¹³

El carácter de los intereses de clase que representaba Romero —el sector agrario de la burguesía— le impedía tener una política de respuestas para resolver las demandas populares, fenómeno que fue profundizando la polarización de clases. Entre los sectores derechistas agrupados en ANEP y en FARO, que inicialmente habían apoyado a Romero, se fue extendiendo la idea de que el gobierno era incapaz de contener los brotes de descontento y de desorganizar y aislar la protesta social. La fracción industrial, por su parte, insistía en la necesidad de reformas, sobre todo a la estructura económica, pero también a los mecanismos de participación política. Las agrupaciones que formaban parte de la UNO, señalaban la urgencia de establecer canales democráticos para esta participación. La Iglesia progresista, por boca de Monseñor Oscar A. Romero, denunciaba la violencia creciente contra los sectores populares.¹⁴ Entre la población que actuaba en los frentes de masas la práctica organizativa, la manera en que lograban resolver sus demandas al margen de los canales institucionales, reforzó la convicción de que ésa era la única manera de satisfacer sus reivindicaciones y que del Estado sólo podían recibir cárcel, persecución o muerte. Al mismo tiempo, debido a que la crisis económica golpeaba a los trabajadores y muchas empresas cerraron o disminuyeron su planta de empleados, las filas de las agrupaciones que integraban los frentes de masas (BPR, FAPU, LP 28) fueron engrosando. En esta etapa las organizaciones populares tenían concepciones políticas distintas, divergían en sus apreciaciones sobre la clase dominante, sobre los militares y sobre la política de alianzas; tampoco había vinculación orgánica entre ellas, ni habían logrado integrar un programa común, sólo compartían los métodos de lucha y la visión integral de la contienda política.

En febrero de 1979, bajo la presión de la protesta generalizada, el general Romero derogó la Ley de Defensa,¹⁵ pero mantuvo la persecución contra líderes obreros, campesinos y magisteriales. Ante el deterioro político, Romero trató de incorporar a los partidos de oposición y en mayo de ese año llamó a la integración de un Foro Nacional y prometió que las elecciones de 1980 serían libres; a la vez acusaba a las organizaciones populares de

¹³ Cfr. "El Salvador, Informe Económico y Social, 1978". El Salvador, informe gubernamental, mimeo, 1978.

¹⁴ En su Tercera Carta Pastoral, Monseñor Romero denunciaba la violencia y reivindicaba el derecho que tenían los sectores populares para organizarse. Cfr. "La Iglesia y las Organizaciones Políticas Populares". *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Universidad Centroamericana J.S. Cañas, Año XXXIII N° 359, septiembre 1978, pp. 769-773.

¹⁵ En su sección editorial, la revista *Estudios Centroamericanos* insistió en la necesidad de una amnistía general para calmar las tensiones sociales. Cfr. *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, Universidad Centroamericana J.S. Cañas, Año XXXIII, Nos. 353 y 355, marzo y mayo de 1978.

subvertir el orden y de querer instaurar el socialismo en el país.¹⁶ Los partidos de la UNO se negaron a participar en el Foro, en tanto no cesara la represión, y anunciaron que no competirían en las próximas elecciones. La autoridad del gobierno de Romero disminuía todos los días, los enfrentamientos entre las clases eran cada vez más directos a través de paros, huelgas, secuestros, fusilamientos, en los que sectores derechistas, grupos paramilitares, ejército y policía gozaban de impunidad y protección.¹⁷ En agosto, el subsecretario adjunto del Departamento de Estado norteamericano, V. Vaky realizó una jira por Centroamérica para observar las repercusiones de la caída de Somoza en Nicaragua. Sobre El Salvador declaró que la movilización popular se debía a las injustas condiciones de vida y a la necesidad de reformas económicas y políticas.

Frente a la erosión del gobierno de Romero, la fracción industrial de la burguesía, aliada a los cuadros modernizantes del ejército y a la democracia cristiana, derrocó a Romero. En este golpe de Estado hay que tener bien presente la estrategia del gobierno norteamericano que, con el objeto de impedir la radicalización del movimiento popular, como ocurrió en Nicaragua, apoya una política de reformas para evitar revoluciones.¹⁸ Encabezaron el golpe los coroneles Majano y Gutiérrez, que formaban parte del Movimiento de la Juventud Militar. En la proclama que emitieron señalaron que la medida golpista representaba la voluntad del conjunto de las Fuerzas Armadas, que se sublevaron porque la política de Romero estaba conduciendo a un enfrentamiento entre el pueblo y el gobierno, prometieron el cese de la violencia y de la represión, garantizar la vigencia de los derechos humanos y adoptar medidas para redistribuir la riqueza nacional.¹⁹

La nueva Junta de gobierno fue integrada con los coroneles Majano y Gutiérrez y con tres civiles que representaban a la Democracia Cristiana, a la empresa privada y al Foro Popular, organismo fundado por asociaciones políticas y gremiales dos semanas antes del golpe. La Junta trató de dar una salida política a la polarización, para lo cual elaboró un programa de reformas, al que incorporó demandas por las que habían venido luchando los sectores populares, con el objeto de quitar banderas de lucha al movimiento popular.²⁰ Destacan la reforma agraria —que en su modo recuerda el diseño de aldea estratégica que hiciera el general Taylor para Vietnam— la nacionalización de la Banca y del comercio exterior. Además decretaron alzas salariales y la disolución de ORDEN.

A pesar de las promesas de democratización, continuaron las actividades represivas. En noviembre la Comisión de Derechos Humanos denunció

¹⁶ *Informática*, op. cit., pp. 22, 31.

¹⁷ *Ibid.*, pp. 25, 27.

¹⁸ Cfr. Toriello, Guillermo. "Centroamérica frente al proceso revolucionario en El Salvador", en *¿El Salvador en la hora de la Revolución Latinoamericana?*, México, Nuestro Tiempo, 1980, pp. 44-59.

¹⁹ *Informática*, op. cit., octubre-noviembre de 1979, pp. 3-5.

²⁰ *Ibid.*, pp. 6-7.

que en las dos primeras semanas la represión había cobrado 200 víctimas. La Junta no se hacía responsable de los asesinatos ni de los actos de desalojo violento en fábricas, haciendas, iglesias y los atribuía a los Cuerpos de Seguridad, situación que expresaba la debilidad política del nuevo gobierno. Como la estructura de poder dentro del ejército no fue tocada, los oficiales ultraderechistas continuaron reprimiendo, de acuerdo a sus propias concepciones de cómo gobernar. Los jefes de la Junta no pudieron controlar la actividad ultraderechista, con la que por otro lado coincidían. La coincidencia esencial era reprimir la movilización popular para impedir que el pueblo tomara la iniciativa. Los primeros, para mantener el control de las reformas, de ahí la verticalidad; los segundos, porque en su concepción el pueblo debe ser excluido, se trata de volver atrás una página a la historia para seguir ejerciendo el poder. No olvidemos que desde 1932 la clase dominante salvadoreña ha delegado en el ejército la función de gobierno.

En un contexto de crisis de autoridad estatal, en el que las agrupaciones populares (sindicales, campesinas, magisteriales, estudiantiles, etcétera) han descubierto que su participación organizada es un arma para solucionar sus demandas y expresar su protesta, que la manera de resolver las reivindicaciones forma parte de la solución, una política vertical no construye consenso, sino que aísla, de ahí surge el impulso con que luchan a pesar del terror y la represión.

Por otra parte, la fracción agraria de la burguesía se opuso a las reformas propuestas por la Junta, dado que alteraban la estructura de la propiedad. A través de sus organizaciones exigían la reinstauración del orden social que conocían, aquél que no afectaba sus intereses, pero también tomaba parte en la campaña de terror contra el pueblo.

El esfuerzo reformista de quienes participaban en el gabinete de la Junta era deshecho cotidianamente a través de infinitos obstáculos. Esta situación, y el agravamiento de la represión, condujeron a la renuncia de funcionarios y ministros y finalmente de los representantes del Foro Popular y de la Democracia Cristiana en la Junta.²¹ La renuncia de los dos miembros de la Junta y de los ministros a fines de diciembre de 1979, abrió un nuevo período en el proceso político salvadoreño.

En cuanto al campo popular, eliminó divergencias acerca de las vías de transformación y del carácter de la Junta, lo cual aceleró la integración de la izquierda y de los frentes de masa; la acción empezó a ser conjunta, se extendió la solidaridad y se comenzó a poner en práctica una estrategia de lucha común. La actividad que mejor ilustra esta afirmación es el paro nacional que llevó a cabo la federación sindical FENASTRAS el 23 de enero, después de que fue reprimida una manifestación masiva. Entre los objetivos del paro se contemplaban, además de reivindicaciones propias, el

²¹ Cfr. Bloque Popular Revolucionario, *Boletín Internacional*, México, enero 1980, pp. 15-17. Como motivo de la renuncia, los ministros señalaron el control que el Ministro de Defensa y Seguridad Pública ejercían por encima de la Junta de Gobierno; además, denunciaron "la política de reformas con represión".

levantamiento del cerco que el ejército había tendido a la universidad, donde había miles de campesinos refugiados.²² A mediados de febrero, en un contexto de rumores de golpe de Estado ultraderechista, se produjo el anuncio de unificación de las organizaciones populares BPR, FAPU, LP 28 y Unión Democrática Nacionalista, en una Coordinadora Revolucionaria de Masas, que difundió un programa de lucha común.²³ El proceso de integración avanzó con la creación de la Coordinadora Revolucionaria Político Militar, donde se agruparon las FPL, las FARN y el Partido Comunista. De manera paralela, las organizaciones sindicales y de empleados se unificaron en el Consejo Sindical Revolucionario.

El programa en torno al cual se agruparon los frentes de masas y las organizaciones político militares, da cuenta de una visión global de transformación de la sociedad salvadoreña y rescata las viejas y nuevas reivindicaciones que han dado impulso a los combates populares, por eso contempla modificaciones en la política y la economía, y plantea fundar un gobierno democrático revolucionario donde se respeten las libertades individuales y de las organizaciones populares; el régimen que propone instaurar coloca en el centro de la toma de decisiones a los órganos del poder popular, sostenidos en comités del pueblo, que serán la base de una posible Junta de Gobierno. Asimismo, diseña la creación de una Central Única de trabajadores que agrupe a obreros agrícolas e industriales, a pequeños comerciantes y a productores independientes. Para acabar con el papel represivo que han jugado las Fuerzas Armadas y convertirlas en garante de las decisiones colectivas, se pretende reestructurarlas, en tanto que las agrupaciones paramilitares como ORDEN y UGB serán disueltas, igual que las asociaciones empresariales que hasta ahora sólo han difundido intereses y opiniones de los sectores más derechistas, como FARO. Los beneficiarios de la nueva sociedad serán los oprimidos y explotados del presente, por eso, a diferencia del objetivo político militar que deja entrever el proyecto de reforma agraria presentado por la Junta, la Coordinadora Revolucionaria de Masas propone modificar la estructura de la propiedad agraria en todo el territorio, sobre todo en las zonas de cultivos para la exportación. Por eso prevee la nacionalización de las ramas estratégicas de la industria monopolística, del comercio exterior, del sistema financiero, y eliminar los grandes monopolios comerciales; porque los trabajadores y los sectores medios deberán ser favorecidos por el desarrollo, se proponen nuevas políticas salariales, crediticia y el control de precios, y se diseñan una campaña de alfabetización, una reforma médico hospitalaria y proyectos para construir viviendas populares.²⁴

²² *Uno más Uno*, 24 de enero de 1980, pp. 1, 8, *El Día*, 24 de enero de 1980, p. 14.

²³ *Uno Más Uno*, 12 de enero de 1980, pp. 1, 10. *Uno Más Uno*, 13 de enero de 1980, p. 9.

²⁴ Cfr. Coordinadora Revolucionaria de Masas, "Plataforma Programática del Gobierno Democrático Revolucionario", en *El Salvador, pueblo en lucha*, El Salvador, Ed. Unidad Revolucionaria, mayo de 1980.

La unificación que los frentes de masas, las organizaciones político militares y las agrupaciones gremiales llevaron a cabo, significó un gran avance en las posibilidades de incidir en el proceso político y ampliar su capacidad de influencia en otros ámbitos de la sociedad.

La renuncia de los representantes del Foro Popular y de la Democracia Cristiana, los términos en que se dio la reorganización de la Junta y la polarización de clases, precipitaron la escisión del Partido Demócrata Cristiano en dos tendencias: los sectores conservadores sostuvieron su apoyo de los gobiernos de Venezuela y Costa Rica. La otra corriente se definiría con el campo popular.

Ante la coordinación de las agrupaciones del pueblo, la estrategia de la provocación y el terror fue ampliada; se trataba de que los sectores populares desbordaran la contención de su dirección política, de lograr que estallara un brote insurreccional y un conflicto abierto en que los adversarios serían desiguales, enfrentamiento que la CRM ha evitado en tanto se logra completar el proceso de erosión política de la Junta. En este contexto debe analizarse el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en marzo de este año, cuya labor de denuncia de la violencia oficial culminó con el llamado que hizo a los soldados para que desobedecieran las órdenes de reprimir. Un día después lo mataron.

La polarización y reagrupamiento de las clases en El Salvador ha continuado. Poco después del asesinato de Monseñor Romero, se integró el Frente Democrático Salvadoreño (FDS), constituido por federaciones sindicales y organizaciones de sectores medios y pequeña burguesía, que se ha adherido al programa de reivindicaciones democráticas de la CRM.²⁵ Las agrupaciones ultraderechistas, por su parte, continúan la política del terror, pero también han buscado apoyo entre los sectores más conservadores del gobierno norteamericano y han criticado a ese gobierno por impulsar los programas reformistas de la Junta.

Hasta ahora hay un difícil equilibrio, porque no obstante que hay tres proyectos, los adversarios son dos. El peligro que para el esquema de dominación actual representa la coordinación y unificación de las organizaciones populares, la acción conjunta, la defensa colectiva y la polarización a que se ha llegado en el proceso de lucha, ha propiciado que los sectores de la clase dominante —los conservadores y los que quieren reformar— dejen a un lado sus diferencias para tratar de mantener un orden que ha preservado sus intereses, y acabar de raíz la iniciativa popular organizada. Ahora los sectores de la clase en el poder no discuten los proyectos, sino la manera de vencer al enemigo. Por el momento la viabilidad de un programa conservador que propone reprimir sin modificar, que plantea una masacre sin alternativas políticas, sin reformas a la estructura económica —que en el actual modelo de acumulación significaría sumir a El Salvador en el atraso económico y en el viejo modelo de exclusión política— no está en el tapete de la discusión. Tampoco se cuestiona la estrategia de la Junta,

²⁵ *El Día*, 2 de abril de 1980, p. 13.

que combina reformas con represión, ni el programa que defiende, programa que de poderse implementar permitiría la continuación del gobierno burgués en el país, ya que pondría en marcha reformas parciales a la estructura de la propiedad y a la distribución del ingreso. Ahora la clase dominante se ha unido y cuenta con el apoyo abierto del gobierno norteamericano, apoyo que se traduce en asesoría militar, recursos financieros para adquirir equipo bélico y reanimar la economía.

El proceso de polarización política ha puesto en segundo plano las diferencias internas y dibuja un escenario claro en que los adversarios son desiguales. En este proceso, la Coordinadora Revolucionaria de Masas y el Frente Democrático también tiene una estrategia de lucha en la que han venido avanzando paso a paso y han consolidado orgánicamente la experiencia acumulada en años de lucha. Por otra parte, paralela a su estrategia de acumulación de fuerzas y de desgaste político del gobierno, las organizaciones revolucionarias iniciaron —después de la muerte de Monseñor Romero— una estrategia de desgaste militar basado en el hostigamiento cuyo objetivo es atemorizar al bando contrario, e implica el deterioro de la moral y seguridad del enemigo. Este modo de actuar no contempla por el momento una insurrección abierta, en que la superioridad bélica del ejército y demás órganos represivos es notoria, gracias al apoyo norteamericano y otros gobiernos del “mundo libre”.

La posibilidad de una intervención armada norteamericana, ya sea directa o indirecta, está abierta, pero no hay que olvidar que significaría la centroamericanización del conflicto.

Una solución democrática debe contemplar la incorporación de los intereses populares, tanto en lo que se refiere a las demandas por un mejor nivel de vida, como a las formas organizativas para conseguirlas. A pesar del napalm, de los asesinatos, de la amenaza intervencionista y de la brutalidad con que se pretende aterrorizar a la población, la posibilidad de que triunfe el pueblo no está cancelada.

La importancia política del actual proceso salvadoreño se expresa en dos rasgos íntimamente relacionados, el primero de los cuales reside en el hecho de que en el proceso de la crisis del Estado, haya fructificado un esfuerzo organizativo, cuyo proyecto de poder autónomo se extiende a la sociedad, y es defendido por los sectores populares. El segundo rasgo específico de El Salvador es la convergencia del impulso de lucha popular, con el desarrollo de una visión política que concibe la transformación de la sociedad de una manera global, totalizadora, que liga la necesidad de la lucha armada con la tarea organizativa cotidiana. Esta visión de las agrupaciones políticas recoge las experiencias, los triunfos y los fracasos de la revolución en otras partes; también retoma las demandas antiguas e intenta rescatar raíces nacionales.

El movimiento espontáneo ha accedido a formas organizativas que, en el proceso de la crisis, le han permitido estructurar y extender un proyecto de poder autónomo, distinto del que hasta ahora han sostenido las clases

dominantes. Del descontento de sectores populares —campesinos, obreros, estudiantes, maestros— que luchan por la satisfacción de sus demandas inmediatas, se ha ido consolidando la acción conjunta que ha permitido ligar la lucha reivindicativa con la lucha por objetivos mediatos, que delinean los contornos de una nueva forma de organización social, que favorezca a la mayoría de la población.